

Los hermanos del hijo pródigo

JOSÉ YOLDI

Seguro que recuerdan la parábola del hijo pródigo, aquella historia recogida en el Nuevo Testamento en la que un tipo se gasta la herencia en señoras y que cuando se le acaba el dinero vuelve donde su padre y éste, encantado, le organiza una fiesta, en lo que sin duda debe de ser el origen del comportamiento e los niños de papá.

No me voy a molestar en criticar al hijo crápula, porque, como decía Jean de la Bruyère, "es empresa vana tratar de ridiculizar a un necio rico: las carcajadas están de su parte. Me interesa más el cabreo del hermano callado y trabajador que ha permanecido junto a su padre, obedeciendo fielmente todas sus órdenes, sin recibir nunca "un cabrito para celebrar una fiesta" con sus amigos y al que ni siquiera avisan para que asista al sarao por la vuelta del hermano y se tiene que enterar al oír la música cuando vuelve del trabajo. Una persona a la que sus indudables méritos no le son gratificados como a él le gustaría.

La mayoría de los jueces españoles, la mayoría de los policías y, en general, de los servidores públicos desarrolla su trabajo con corrección y honradez. Muchos de ellos meten más horas y tienen una carga laboral más elevada que la que les corresponde y procuran ser eficaces.

Sin embargo, una vez cada cierto tiempo, algo arruina la imagen del colectivo. Los cuerpos policiales están en un buen momento en la lucha antiterrorista y han tenido éxitos notables contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un lunar, sin embargo, ensombrece el panorama y pasa la correspondiente factura en la percepción de la ciudadanía de su labor: el caso de Marta del Castillo, la joven presuntamente violada y asesinada en Sevilla, cuyo cuerpo no ha podido ser hallado. Dos rufianes se han mofado de toda la institución, se ha dragado el Guadalquivir y durante días y días se ha puesto patas arriba un vertedero sin que el cadáver aparezca. Ni siquiera hay un relato solvente de lo ocurrido, más allá de la culpabilidad del ex novio de la chica.

En el caso de los jueces ocurre lo mismo. La transparencia en el juicio por los atentados del 11-M y su retransmisión pública supuso un elevado grado de aceptación y de confianza en la justicia, el más alto de la reciente historia judicial española. Poco más de dos años después, ese índice está por los suelos. ¿Quiere ello decir que los jueces hacen peor su trabajo que hace dos años? Parece evidente que no. ¿Qué ha pasado entonces?

Pues que el Supremo, en lo que tuvo aire de vendetta, condenó al entonces presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por desobediencia con el mismo precepto por el que había absuelto al presidente del Santander, Emilio Botín, y utilizando para ello los servicios de una acusación popular tan infumable como el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

Ha pasado que el alto tribunal ha absuelto de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) al juez Francisco Javier de Urquía, una joya que recibió de Juan Antonio Roca, el príncipe de la corrupción en Marbella,

73.800 euros para pagarse una casa a cambio de varias resoluciones favorables. Urquía había sido condenado a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación de su cargo de juez por el Tribunal Superior andaluz por cohecho (soborno) y prevaricación, pero el Supremo ha reajustado toda la condena a 21 meses de suspensión de su empleo de magistrado sólo por el cohecho, permitiendo que vuelva a ejercer.

Y ha pasado, sobre todo el caso de Mari Luz Cortés, la niña que fue asesinada el 13 de enero de 2008 por el pederasta Santiago del Valle, lo que no hubiera ocurrido de haber estado el degenerado en prisión, que era donde debía estar porque había sido condenado a tres años de cárcel en 2002 por abusar sexualmente de su propia hija. La falta de ejecución de la sentencia, responsabilidad del juez Rafael Tirado, hizo posible que Del Valle campara a sus anchas.

Así que sí, por unos pocos pagan todos. Los hermanos del hijo pródigo tienen razones para quejarse. Claro que muy pocos ciudadanos entienden que estos magistrados callados y trabajadores organicen una huelga en la que precisamente los perjudicados sean aquellos a los que supuestamente se trata de beneficiar. *Quid pro quo*.

El País, 13 de julio de 2009